



NACIONES UNIDAS

ASAMBLEA

GENERAL



Distr.
GENERAL

A/33/457
8 diciembre 1978

ORIGINAL: ESPAÑOL

Trigésimo tercer período de sesiones
Tema 24 del programa

APLICACION DE LA DECLARACION SOBRE LA CONCESION DE LA INDEPENDENCIA
A LOS PAISES Y PUEBLOS COLONIALES

Carta de fecha 7 de diciembre de 1978 dirigida al Secretario General
por el Representante Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, cumpliendo instrucciones de mi Gobierno, para solicitarle, de conformidad con los usos y prácticas establecidos, se sirva circular el documento adjunto, que lleva la firma del Secretario General del Partido Socialista Puertorriqueño, Sr. Juan Mari Bras, como documento oficial de la Asamblea General en relación con el tema 24 del programa.

(Firmado) Raúl ROA-KOURI
Embajador

ANEXO

Mensaje de fecha 7 de diciembre de 1978 dirigido a todas
las delegaciones en la Asamblea General

Intentaremos resumir en estas líneas el testimonio que habríamos prestado ante la Cuarta Comisión de habérsenos concedido a tiempo la audiencia solicitada. Las argucias procesales desplegadas por el Gobierno de los Estados Unidos, en combinación con sus aliados más incondicionales, lograron retardar la toma de una decisión sobre nuestra petición de audiencia, convirtiendo la misma en académica, para todos los fines prácticos, ya que la Cuarta Comisión ha concluido sus sesiones por este año y el tema 24, dentro del cual está incluido el caso de Puerto Rico, está a punto de ser sometido a debate en el plenario de la Asamblea General. Por tal razón, nos valemos una vez más de la insobornable solidaridad cubana con la causa de Puerto Rico para hacer llegar por este medio, sucintamente, nuestros planteamientos ante la Asamblea General.

Está ante la consideración de la Asamblea General, como parte del informe del Comité Especial de Descolonización, la resolución sobre Puerto Rico aprobada por dicho comité el 12 de septiembre de 1978 (A/AC.109/574). Esa resolución reviste importancia estratégica en la lucha por la descolonización de Puerto Rico.

La resolución reafirma en el primer párrafo de la parte dispositiva "el derecho inalienable del pueblo de Puerto Rico a la libre determinación y la independencia de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General". Este principio fue aprobado por primera vez en la resolución de 1972 y reiterado en la de 1973. En ambas ocasiones dichas resoluciones acordadas en primera instancia por el Comité Especial, fueron ratificadas por la Asamblea General al aprobar los respectivos informes de dicho Comité Especial.

En el párrafo 2 de la parte dispositiva, reafirma que, en virtud de ese derecho, el pueblo de Puerto Rico debe decidir libremente su estatuto político futuro y procurar su mayor desarrollo económico, social y cultural". Es importante destacar que es en virtud del derecho inalienable a la libre determinación e independencia que la resolución enmarca el derecho del pueblo puertorriqueño a decidir su status político futuro.

El párrafo 3 de la parte dispositiva "afirma que la libre determinación del pueblo de Puerto Rico en un proceso democrático deberá llevarse a cabo mediante mecanismos libremente escogidos por el pueblo puertorriqueño en completa y total soberanía, de conformidad con la resolución 1514 (XV) que, entre otras cosas, dispone el pleno traspaso de todos los poderes al pueblo del Territorio, y que toda decisión relativa al estatuto deberá contar con la aprobación del pueblo puertorriqueño". (Subrayados nuestros.) Nótese que la resolución establece con toda claridad que el proceso de libre determinación en Puerto Rico debe regirse por la resolución 1514 (XV), y no por ninguna otra, y por tanto exige como requisito previo para que se dé ese proceso de libre determinación, que haya un traspaso de todos los poderes al pueblo puertorriqueño por parte del Gobierno de los Estados Unidos y que al momento de ejercer su autodeterminación, el pueblo puertorriqueño esté en "completa y total soberanía".

/...

El párrafo 4 de la parte dispositiva "considera que las persecuciones, hostigamientos y medidas represivas de que han sido objeto permanentemente las organizaciones y personas que luchan por la independencia constituyen violaciones del derecho nacional del pueblo puertorriqueño a la libre determinación y la independencia".

En el párrafo anteriormente citado, el Comité Especial recoge los planteamientos hechos por diversos peticionarios que representaron a los partidos y organizaciones que luchan por la independencia de Puerto Rico, sobre la magnitud de las acciones represivas y persecutorias de que han sido objeto, y continúan siéndolo, los patriotas que luchan por la liberación de Puerto Rico por parte de diversas fuerzas y agencias militares, paramilitares y policiacas del Gobierno de los Estados Unidos. Tanto en años anteriores como en este año, hemos traído ante la consideración del Comité Especial los diversos casos de represión más sobresalientes, incluyendo asesinatos y masacres planeados y ejecutados por la Policía de Puerto Rico, el FBI y otras agencias dedicadas a la persecución política del movimiento patriótico. Trajimos también ante la consideración del Comité Especial las admisiones hechas por el FBI, ante requisitoria nuestra bajo la Ley de Libertad de Información de los Estados Unidos, de que esa agencia policiaca norteamericana ha estado espiando, persiguiendo y hostigando a las organizaciones, líderes y militantes del movimiento independentista, por lo menos desde 1943 y que a partir de 1961 iniciaron una campaña bajo el nombre de "COINTELPRO" dirigida a "dividir, romper y perturbar el desarrollo del movimiento independentista". Esa campaña, por admisión del FBI en documentos que se han hecho públicos, ha contado con la colaboración activa de los principales medios de comunicación masiva en Puerto Rico (radio, prensa y televisión) a los fines de desinformar y distorsionar ante el pueblo puertorriqueño sus realidades y los planteamientos y posturas de las organizaciones patrióticas.

Es evidente, por lo tanto, que al recoger esa denuncia en el texto de la resolución, el Comité Especial está rechazando todas las alegaciones hechas por los portavoces oficiales y oficiosos del Gobierno de los Estados Unidos en el sentido de que el pueblo puertorriqueño ha ejercido en el pasado, está ejerciendo en el presente o pueda ejercer en el futuro, bajo los términos del status actual, dicho derecho a la libre determinación. Por eso es que el Comité Especial ha reiterado en varias cláusulas de esta resolución el requisito del traspaso previo de poderes al pueblo de Puerto Rico. Por estas mismas razones, quedan invalidadas todas las cifras electorales de elecciones, consultas y referenda efectuada en relación al status político de Puerto Rico bajo estas condiciones de continua persecución y hostigamiento de las fuerzas patrióticas.

En el párrafo 5 de la parte dispositiva de la resolución, el Comité Especial "considera que, en el evento de que el pueblo de Puerto Rico decidiera formar una república independiente, tendrá derecho a recuperar la totalidad de su territorio nacional, incluidas todas las tierras que utilizan actualmente las autoridades del Gobierno de los Estados Unidos de América".

/...

El párrafo anterior tiene la importancia de dejar establecido el derecho del pueblo puertorriqueño a recuperar todo su territorio en la independencia, frente a las pretensiones de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, y en particular de la Marina de Guerra de ese país, de mantener sus bases militares en territorio puertorriqueño no importa cual sea el status político de Puerto Rico.

El párrafo 6 de la parte dispositiva "considera también que toda forma de asociación libre entre Puerto Rico y los Estados Unidos deberá ser en condiciones de igualdad política a los fines de que respete plenamente las disposiciones de las resoluciones y decisiones pertinentes de la Asamblea General y del derecho internacional aplicable, y deberá reconocer la soberanía del pueblo de Puerto Rico".

El párrafo citado reviste gran importancia. Corresponde a los planteamientos hechos ante el Comité Especial por los portavoces de un partido político puertorriqueño y varias organizaciones y tendencias que buscan una asociación política con los Estados Unidos como solución al status presente. En dicho párrafo se establecen las bases mínimas para la validación internacional de esa alternativa. Al enmarcar la misma dentro de las resoluciones y decisiones pertinentes de la Asamblea General y del derecho internacional aplicable, y específicamente exigir que dicha fórmula deberá reconocer la soberanía del pueblo de Puerto Rico, el Comité Especial hace constar que si bien el pueblo puertorriqueño podría asociarse a los Estados Unidos una vez se la hayan traspasado todos los poderes y pueda ejercer su libre determinación sin cortapisas algunas, esta asociación deberá ajustarse a lo que se ha definido en la legislación internacional como la "libre asociación". Esta fórmula, en derecho internacional, tiene que reservar la soberanía al pueblo asociado, incluyendo el derecho a decidir unilateralmente dar por terminada la asociación. Por lo tanto, la libre asociación es incompatible con cualquier esquema de "unión permanente" entre el pueblo asociado y el país metropolitano.

El párrafo 7 de la parte dispositiva "insta al Gobierno de los Estados Unidos a que ponga en libertad incondicional a las cuatro personalidades políticas que han estado encarceladas durante más de 24 años". Las cuatro personalidades políticas a que se refiere este párrafo son Oscar Collazo, patriota puertorriqueño que está preso en prisiones federales norteamericanas desde noviembre de 1950; Lolita Lebrón, Rafael Cancel Miranda e Irving Flores, patriotas puertorriqueños encarcelados en prisiones federales norteamericanas desde marzo de 1954. Son los presos políticos más antiguos de todo el hemisferio occidental. Todas las fuerzas políticas puertorriqueñas han reclamado la libertad de estos patriotas y gran cantidad de Gobiernos, instituciones y personalidades de distintas partes del mundo se han unido al reclamo por su liberación, al cual se une ahora el Comité Especial de Descolonización, en nombre de toda la comunidad internacional. Hasta el presente, el Presidente de los Estados Unidos, en cuyas manos está la decisión para poner en libertad a estos ilustres puertorriqueños, no ha contestado la solicitud que le han hecho todas estas fuerzas del mundo entero.

/...

El párrafo 8 de la parte dispositiva es una reiteración del principio establecido en los párrafos primero y tercero, pero en un contexto particular que reviste gran importancia. Dicho párrafo insta al Gobierno de los Estados Unidos a que acate los principios de la resolución 1514 (XV) con respecto a Puerto Rico". Debe leerse este párrafo en su relación con los dos últimos párrafos preambulares que dicen lo siguiente:

"Recordando la declaración sobre Puerto Rico pronunciada en nombre del Presidente de los Estados Unidos de América el 27 de noviembre de 1953, en el octavo período de sesiones de la Asamblea General, por el Representante Permanente de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas,

"Tomando nota de las declaraciones públicas formuladas acerca de Puerto Rico por el Presidente de los Estados Unidos el 25 de julio de 1978 y por el Representante Permanente de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas el 28 de agosto de 1978."

Las declaraciones hechas ante la Asamblea General en 1953 por el delegado norteamericano Henry Cabot Lodge, en nombre del entonces Presidente Eisenhower, a las cuales se refiere el primer párrafo preambular arriba citado, fueron en el sentido de que en cualquier momento futuro en que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico pidiera "una mayor independencia o aún la independencia completa", el Presidente de los Estados Unidos tomará las medidas inmediatas para cumplir con ese pedido del pueblo puertorriqueño.

Las declaraciones hechas por el Presidente Jimmy Carter, a que se refiere el segundo párrafo preambular arriba citado, fueron incluidas en una proclama presidencial emitida el pasado 25 de julio, en ocasión de cumplirse ochenta años de la invasión de Puerto Rico por las tropas norteamericanas y veintiséis años de fundado el llamado estado libre asociado de Puerto Rico. En las mismas, Carter se compromete a respetar la libre determinación del pueblo de Puerto Rico en el contexto de su referencia a un plebiscito anunciado por el Gobernador colonial Carlos Romero Barceló para tener lugar en 1981. Las declaraciones del Representante Permanente de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Andrew Young, de agosto de 1978, lo que hacen es referirse a la proclama de Carter, del 25 de julio de este mismo año.

Es importante anotar que la referencia a la proclama de Carter y a las declaraciones de Young en los párrafos preambulares de la resolución fueron gestionadas por la delegación de los Estados Unidos por mediación de algunos de sus aliados. Nosotros aceptamos su inclinación a cambio de que se incluyera la referencia a la declaración de Eisenhower en 1953 y de que se incluyera en la parte dispositiva el párrafo ocho. De esa manera, es claro que el Comité Especial, al tomar nota de ambas declaraciones presidenciales norteamericanas sobre Puerto Rico, está manifestando que en relación con las mismas, insta al Gobierno de los Estados Unidos a aceptar los términos de la resolución 1514 (XV). En otras palabras, que el respeto a la libre determinación a que se refiere Carter en su proclama sólo será válido para las Naciones Unidas si cumple con los requisitos de la resolución 1514 (XV) que exige la transferencia previa de poderes al pueblo puertorriqueño.

/...

El párrafo 9 de la parte dispositiva "decide mantener en examen la cuestión de Puerto Rico y pide al Relator que, con la asistencia de la Secretaría, actualice la información sobre esta cuestión a fin de facilitar el examen por el Comité Especial de las medidas complementarias adecuadas en 1979". Es evidente, a la luz de este párrafo, que el Comité Especial tiene el propósito de darle seguimiento a la consideración de este candente asunto colonial el próximo año.

Queremos aprovechar para informar a la Asamblea General que a raíz de aprobada esta resolución por el Comité Especial de los 24, se ha suscitado un intenso debate en Puerto Rico sobre la misma. Dos cadenas de televisión auspiciaron un debate televisado sobre el significado de la resolución en el cual participaron el vicegobernador Reynaldo Paniagua Díaz, en representación del Partido Nuevo Progresista, el presidente del Partido Popular Democrático Lic. Miguel Hernández Agosto, el presidente del Partido Independentista Puertorriqueño Lic. Rubén Berriós Martínez y el suscribiente, en representación del Partido Socialista Puertorriqueño. Se están celebrando foros, conferencias, simposios y múltiples otras actividades en centros universitarios, instituciones profesionales, culturales, obreras y cívicas.

Pocos días después de la aprobación de la resolución por el Comité de Descolonización, el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió una petición de mandamus incoada por el Partido Socialista Puertorriqueño para prohibir el uso de fondos y recursos públicos en la administración de elecciones primarias de un partido norteamericano (el Partido Demócrata) en Puerto Rico. Al sostener la petición de nuestro partido, el más alto tribunal puertorriqueño decidió que el estado libre asociado es un status transitorio, que la Asamblea Constituyente en que se fundó el mismo hizo claro que el pueblo puertorriqueño se había reservado el derecho a cambiar el status político en cualquier momento futuro y que por lo tanto, no pueden utilizarse recursos públicos del pueblo de Puerto Rico para empujar la unión permanente ni la anexión como estado de los Estados Unidos, que es lo que en la práctica representa la importación de los partidos nacionales de los Estados Unidos a Puerto Rico.

El Gobierno colonial, manejado por el Partido Nuevo Progresista, de postura anexionista, decidió no apelar de decisión al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, a pesar de su oposición a la misma, tras consultas extensas con sus representantes legales en Washington, D.C. No obstante, dicho gobierno está desacatando todos los días las directivas establecidas en esa jurisprudencia del Tribunal Supremo y está constantemente utilizando todos los recursos públicos para avanzar en su empeño de culminar la dominación colonial de Puerto Rico convirtiendo a la isla en un estado más de los Estados Unidos.

El curso que está siguiendo el Gobierno colonial, en complicidad con el Gobierno norteamericano, tiene el efecto de impedir la descolonización de Puerto Rico y frustrar, por tanto, el mandato internacional contenido en la resolución aprobada por el Comité de Descolonización.

/...

Urge que la Asamblea General le imparta plena aprobación a la resolución del Comité Especial y específicamente en lo que concierne al seguimiento que éste se propone darle a la misma en sus sesiones del próximo año.

El pueblo puertorriqueño en lucha por la libre determinación y la independencia mantendrá, ampliará y profundizará su forcejeo centenario por la conquista de nuestra soberanía nacional. Este, como factor esencial, junto al apoyo solidario de la comunidad internacional, derrotará los intentos imperialistas de aplastar la nacionalidad puertorriqueña. Puerto Rico será libre, soberana e independiente, por encima de todas las presiones, represiones y maniobras de los Estados Unidos y de sus servidores incondicionales, en nuestro país y en el mundo. La descolonización habrá de darse en la principal colonial del más poderoso imperio del mundo contemporáneo. Hasta que Puerto Rico venza sobre el colonialismo, conquistando su plena soberanía, no habrá terminado la inmensa lacra del coloniaje de América y estará amenazada la estabilidad y la libertad de todos los pueblos americanos.

(Firmado) Juan Mari BRAS
Secretario General
Partido Socialista Puertorriqueño